

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**RAMA JUDICIAL**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN-SALA LABORAL**  
Medellín, ocho (8) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Recurso de Queja  
Exp. 022-2020-00181

La Sala Quinta de Decisión Laboral resuelve el recurso de queja propuesto por GUILLERMO ANTONIO ZULUAGA HERNÁNDEZ frente al auto que declaró improcedente la apelación formulada para cuestionar la providencia que “*negó el decreto de unas pruebas*”, en el marco del juicio especial de fuero sindical que en su contra inició ISA INTERCOLOMBIA S.A ESP.

**ANTECEDENTES:**

ISA INTERCOLOMBIA S.A. ESP dio impulso a este proceso especial con el fin de lograr el levantamiento del fuero sindical que enrostra a su trabajador Guillermo Antonio Zuluaga Hernández para proceder con su despido por incurrir en la justa causa prevista en el numeral 14 del artículo 62 del C.S. del T., en concordancia con el artículo 101 del Reglamento Interno de Trabajo y el parágrafo 3° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993.

Vinculada la pasiva con el trabajador y el Sindicato de Trabajadores de Empresas de Energía Eléctrica de la República de Colombia - SINTRAENERGIA- y agotado el trámite desplegado por la alzada que se interpuso contra el auto que resolvió la excepción previa de pleito pendiente, se continuó con el procedimiento respectivo y en la etapa de decreto de pruebas el Juez de Instancia incluyó el interrogatorio de parte del Representante Legal de Intercolombia S.A ESP solicitado por el demandado,

decisión sobre la que el apoderado judicial de la sociedad solicitó la reposición (Min 24:00 Archivo 61) por ser la empresa demandante de servicios públicos mixta y en ese orden, no le es dable la confesión a quien la representa, determinación que el titular en efecto repuso (Min 34:41 Archivo 61), dando razón al recurrente en coherencia con el contenido del artículo 195 del CGP y la documental del archivo 21 que da cuenta de la naturaleza pública de la sociedad desde el año 2013.

En ese orden, la apoderada judicial del convocado sugirió cumplirse lo dispuesto en la normativa procesal enunciada en cuanto a pedirse que el representante administrativo de la entidad rinda informe escrito bajo juramento sobre los hechos debatidos, lo que fue negado de plano por el Despacho (Min 37:37 Archivo 61) por considerar que las partes tuvieron la oportunidad de solicitar las pruebas que se consideraran pertinentes con la contestación a la demanda sin que el informe pedido enlistara el pedimento probatorio.

Bajo tal contexto, la representante jurídica del demandado formuló alzada (Min 38:58 Archivo 61) porque aunque es verdad que ya precluyó la etapa para la contestación a la demanda, adujo que ello no tiene que ver con lo solicitado para que se rinda el informe, ya que son etapas procesales diferentes y no tiene que ser rendido con la contestación sino que hace parte de la práctica de las pruebas como etapa oportuna para ese efecto, teniendo en cuenta por demás que incluso ya se había aceptado el interrogatorio de parte. En ese orden señaló, que admitiendo en gracia de discusión la no absolución del interrogatorio, lo que queda en virtud del debido proceso es que el Juez ordene en su lugar rendir el informe, con lo que se suple esa prohibición de confesión de los representantes legales, planteando que de su parte se enlisten las preguntas a que haya lugar y por escrito se dé su debida respuesta.

En ese momento quien representa a la organización sindical propone el recurso de apelación en virtud al interrogatorio de parte negado que fue solicitado en debida forma y coadyuva la solicitud del informe del codemandado.

El *a quo* rechazó de plano los recursos, por parte del Sindicato, por presentarse de manera extemporánea atendiendo a que se estaba ya en la resolución de las solicitudes del demandado por la decisión de reponer el decreto del interrogatorio de parte, habiendo precluido la oportunidad para atacar el auto del decreto de pruebas y por parte del señor Zuluaga Hernández porque no se está decretando ni negando la práctica de una prueba pues lo solicitado fue el interrogatorio de parte, pero ello no indica que se pueda suplir en esta oportunidad la solicitud de pruebas por un informe que no fue pedido (Min 47:43 a 50:43).

El sindicato interviene advirtiendo la procedencia del recurso de apelación por no haberse cerrado la etapa de decreto de pruebas, en tanto la palabra para ese efecto no se había concedido, por lo que solicita se reponga tal determinación (Min 50:50 - 52:04)

GUILLERMO ANTONIO ZULUAGA HERNÁNDEZ, por medio de su mandataria, promovió el recurso de reposición y en subsidio el de queja por denegar los recursos porque si se hace un recuento de la audiencia la etapa de decreto de pruebas respecto a las pruebas negadas diferentes al interrogatorio de parte no fue siquiera objeto de traslado, por lo que no es posible negar recursos por extemporáneos. En ese orden indica que debe reponerse la decisión por no haberse dado la posibilidad probatoria del informe y por ni siquiera darse la oportunidad de apelar sobre las pruebas no decretadas que incluye las de oficio desechadas.

El Juez señala que sobre lo pedido por los sindicatos no se traduce en una petición específica y ante lo señalado por el codemandado adujo sostenerse en la posición en tanto las etapas procesales se han ejecutado debidamente y se dio traslado con oportunidad de actuar sin vulneración al debido proceso, agregando que el rechazo del recurso se dio por no haberse negado ninguna de las pruebas solicitadas y por tanto no encontró una actuación irregular, ordenando enviar las diligencias para surtir la queja propuesta.

### CONSIDERACIONES:

Atendiendo las circunstancias procesales en que se dio el decreto de pruebas y las manifestaciones de la apoderada de la pasiva, se tiene que el problema jurídico consiste en determinar si acertó el Juez de Instancia al rechazar de plano el recurso de apelación que interpuso GUILLERMO ANTONIO ZULUAGA HERNÁNDEZ frente al auto que negó la posibilidad de acceder al informe contenido en el artículo 195 del CGP y a la decisión que impidió acudir a la alzada frente a los demás medios probatorios negados.

Para dar solución a tal contrariedad, acude la Sala al artículo 353 del Código General del Proceso, aplicable a estos ritos por la remisión analógica tipificada en la regla 145 del Código Adjetivo Laboral. Según esa disposición, el recurso de queja debe interponerse en subsidio del recurso de reposición contra el auto que niegue la concesión de -en este caso- el recurso de apelación. Esto es relevante, porque son los argumentos de la reposición aludida, los que han de ser resueltos por el superior al momento de definir si estuvo bien o mal denegado el mecanismo de impugnación.

Dentro del presente asunto, las razones esbozadas por el juez de primer grado para denegar la apelación propuesta por la mandataria judicial de la parte demandada, se circunscribieron en una primera oportunidad a señalar que no se está entorpeciendo el decreto de una prueba solicitada en la contestación, sino que se está negando de plano otra que no fue pedida y con la que dada la negativa del interrogatorio de parte, pretende la parte sea suplido.

Lo primero por decir es que el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, al regular lo concerniente a los autos que son apelables en la primera instancia, indica textualmente que son los siguientes:

- 1. El que rechace la demanda o su reforma y el que las dé por no contestada.*
- 2. El que rechace la representación de una de las partes o la intervención de terceros.*
- 3. El que decida sobre excepciones previas.*
- 4. El que niegue el decreto o la práctica de una prueba.*
- 5. El que deniegue el trámite de un incidente o el que lo decida.*

6. *El que decida sobre nulidades procesales.*
7. *El que decida sobre medidas cautelares.*
8. *El que decida sobre el mandamiento de pago.*
9. *El que resuelva las excepciones en el proceso ejecutivo.*
10. *El que resuelva sobre la liquidación del crédito en el proceso ejecutivo.*
11. *El que resuelva la objeción a la liquidación de las costas respecto de las agencias en derecho.*
12. *Los demás que señale la ley.*

La parte inconforme no disiente concretamente de la decisión que repuso el auto por medio del cual se hizo el decreto de pruebas y se abstuvo de ordenar el interrogatorio de parte al representante legal de la sociedad demandante, sino que su inconformidad radica en que se deniegue la posibilidad de acceder en subsidio, al informe que permite el artículo 195 del CGP.

En ese contexto, esta colegiatura comparte la posición que adoptó el Juez, en tanto ese precepto regulador en efecto, permite dada la invalidación que el legislador otorgó a la confesión de quien representa a una persona jurídica de derecho público, que se pida en su lugar, que la entidad rinda un informe sobre los hechos debatidos, cuya orden penderá del Juez, pero bajo ninguna óptica la intelección de la norma impone lo que pretende la pasiva, quien en su escrito de respuesta prefirió aun con conocimiento de la naturaleza de una empresa de servicios públicos mixta de la demandante (Archivo 21) contar con la prueba del interrogatorio de parte ignorando los postulados procesales en ese sentido, pero no se verifica la inclusión de este informe en el enlistado demostrativo que pretendía hacer valer, por lo que no es posible que en la etapa donde se avalan o no estos medios para su posterior práctica y al ver que su probanza fue negada, acuda a otra para lograr el fin que buscaba alcanzar con el vestigio negado bajo parámetros de legalidad, asistiendo razón tanto al fallador como al apoderado que recorrió traslado de esta manifestación, en cuanto a que ese informe no reemplaza o suple automáticamente el interrogatorio, sino que se trata de una posibilidad que la parte decide acoger o no y claramente ello no aconteció en este escenario, lo que quiere decir que la petición de su inclusión en el haber probatorio si resulta extemporáneo por surtirse solo en el progreso de esta etapa y no antes, y en ese orden, al no ser pedido en el término de ley, menos ha de entenderse que se negó su decreto y práctica,

razonamiento que deriva en que la decisión no sea susceptible de la alzada por no encaminarse en el propósito del numeral 4° del transcrito artículo 65 del CPTSS, resultando en ese orden bien denegado el recurso.

Ahora, también excluyó el Juez cualquier recurso frente al no decreto de la prueba para oficiar a Colpensiones y a ISA Interconexión Eléctrica por aducir que ese impulso procesal se hizo de forma extemporánea, por haberse agotado la oportunidad para el momento en que los apoderados pretendieron atacar el auto que se notificó en estrados.

En este punto, yerra el operador judicial de instancia, porque verificado el desarrollo de la audiencia con detenimiento, lo que se observa es que el Juez decreta el interrogatorio de parte y niega otras probanzas pedidas por los convocados, y acto seguido concede la palabra al apoderado judicial de la activa, cuando interpone recurso de reposición para lograr derruir el decreto del interrogatorio de parte, asunto del que corrió traslado a la pasiva y ello desencadenó la solicitud del informe y los correlativos recursos que finalizaron en la queja, pero es verdad, que el Juez se abstuvo de permitir a los que integran la parte demandada que se pronunciaran sobre el cierre de la etapa del decreto de pruebas y la determinación de las no aceptadas, ocurriendo entonces que se logró el pronunciamiento sobre lo que a esa prueba competía a partir de la reposición propuesta por la actora, pero en ningún momento desde la decisión final del informe del artículo 195 del CGP, fueron puestas en debate las inconformidades que pudiera acarrear para las demandadas las pruebas rescindidas.

En esa línea, esta Corporación encuentra que a partir del manejo de la audiencia rodeada de una técnica tal vez equivocada, se produjo una confusión que emanó en hacer nugatorio a la parte el derecho que le asistía a refutar la decisión relacionada con el no decreto de pruebas de oficio, que debe decirse, sí resulta cuestionable a través del recurso de apelación conforme al artículo 65 numeral 4 del CPT y de la SS, lo que denota una conducta que da paso a contrariar el debido proceso que protege el artículo 29 de la Carta Política al anular el derecho de contradicción, asunto que encuadra en la causal enlistada en el numeral 6° del artículo 133 del CGP, referida a omitir la

oportunidad para sustentar un recurso, que ha quedado dicho era procedente, emergiendo en esos términos la necesidad de ser declarada la nulidad de lo actuado a partir de cuando se notificó en estrados la decisión del decreto de pruebas, conservando vigor lo decidido sobre el interrogatorio de parte y el correlativo informe del artículo 195 del CGP, pero permite a la parte demandada promover la alzada sobre lo decidido en esta etapa y sustentarla en debida forma, eso sí, debiendo conminarse a la quejosa para que promueva las apelaciones que su derecho de defensa le facultan, pero siempre atendiendo el principio de lealtad procesal de cara a la naturaleza del asunto, a la documental que ya obra dentro del expediente y a la necesidad y pertinencia de las pruebas pedidas.

Así las cosas, se declarará bien denegado el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 14 de diciembre de 2022 en lo que atañe a la prueba del informe de que trata el artículo 195 del CGP, y frente a la posibilidad de apelar la decisión sobre la negativa de las pruebas de oficio, se declara la nulidad para permitir a la parte demandada hacer uso del derecho de contradicción y acudir a los recursos de ley.


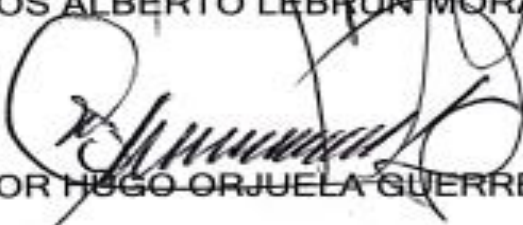
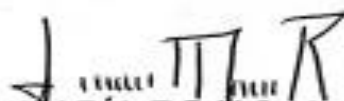
### DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, **DECLARA BIEN DENEGADO** el recurso de apelación interpuesto por GUILLERMO ANTONIO ZULUAGA HERNÁNDEZ en contra del auto del 14 de diciembre de 2021 que negó el decreto del informe de que trata el artículo 195 del CGP. **DECLARA** la **NULIDAD** de lo actuado a partir de cuándo se notifica en estrados la decisión del decreto de pruebas, para permitir a la parte demandada atacar lo decidido sobre las pruebas no ordenadas en su favor.

Por la Secretaría de la Sala, comuníquese esta decisión al Juzgado de primera instancia para que proceda de conformidad.

Se ordena notificar por ESTADOS lo resuelto.

Los Magistrados,

  
CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES  
  
VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO  
  
SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

Certifico: Que la providencia anterior fue notificada por  
ESTADOS N° 21 fijados el 9 de febrero de 2023  
en la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

---

El Secretario.